



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. reservada\*  
19 de mayo de 2011  
Español  
Original: francés

### Comité de Derechos Humanos

101º período de sesiones

14 de marzo a 1º de abril de 2011

### Dictamen

#### Comunicación N° 1780/2008

<i>Presentada por:</i>	Mériem Zarzi (representada por la organización TRIAL – asociación suiza contra la impunidad)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Brahim Aouabdia (su esposo), la autora y sus seis hijos, Mohamed Salah Aouabdia (31 años), Abderaouf Aouabdia (30 años), Abdelatif Aouabdia (25 años), Seif Eddine Aouabdia (24 años), Shoaïb Aouabdia (19 años) y Sabah Aouabdia (18 años)
<i>Estado parte:</i>	Argelia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	29 de octubre de 2007 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 24 de abril de 2008 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	22 de marzo de 2011
<i>Asunto:</i>	Desaparición forzada de una persona durante casi 17 años
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos internos
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Derecho a la vida, prohibición de la tortura y los tratos crueles e inhumanos, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, respeto por la dignidad inherente a la persona, reconocimiento de la personalidad jurídica
<i>Artículos del Pacto:</i>	2, párrafo 3; 6, párrafo 1; 7; 9, párrafos 1 a 4; 10 y 16

\* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

*Artículo del Protocolo*

*Facultativo:*

5, párrafos 2 a) y b)

El 22 de marzo de 2011 el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación N° 1780/2008.

[Anexo]

## Anexo

### **Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (101º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación N° 1780/2008\*\***

<i>Presentada por:</i>	Mériem Zarzi (representada por la organización TRIAL – asociación suiza contra la impunidad)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Brahim Aouabdia (su esposo), la autora y sus seis hijos, Mohamed Salah Aouabdia (31 años), Abderaouf Aouabdia (30 años), Abdelatif Aouabdia (25 años), Seif Eddine Aouabdia (24 años), Shoaïb Aouabdia (19 años) y Sabah Aouabdia (18 años)
<i>Estado parte:</i>	Argelia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	29 de octubre de 2007 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido el 22 de marzo de 2011,*

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación N° 1780/2008, presentada al Comité de Derechos Humanos por Mériem Zarzi en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le ha presentado por escrito la autora de la comunicación,

*Aprueba* el siguiente:

---

\*\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Ahmad Amin Fathalla, Sr. Cornelis Flinterman, Sr. Yuji Iwasawa, Sra. Helen Keller, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sr. Gerald L. Neuman, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Krister Thelin y Sra. Margo Waterval.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del reglamento del Comité, el Sr. Lazhari Bouzid, miembro del Comité, no participó en la adopción de la presente decisión.

Se adjunta en el apéndice del presente documento el texto de los votos particulares firmados por el Sr. Rafael Rivas Posada y el Sr. Fabián Omar Salvioli, miembros del Comité.

## Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo

1.1 La autora de la comunicación, de fecha 29 de octubre de 2007, es Mériem Zarzi, de nacionalidad argelina. Presenta la comunicación en nombre de su esposo, Brahim Aouabdia, nacido el 8 de julio de 1943 en Aïn Mlila, que ejercía la profesión de sastre en Constantina. La autora también presenta la comunicación en su nombre, así como en nombre de sus seis hijos, Mohamed Salah Aouabdia (31 años), Abderaouf Aouabdia (30 años), Abdelatif Aouabdia (25 años), Seif Eddine Aouabdia (24 años), Shoaïb Aouabdia (19 años) y Sabah Aouabdia (18 años). Afirma que su esposo es víctima de violaciones por Argelia de los artículos 2, párrafo 3; 6, párrafo 1; 7; 9, párrafos 1 a 4; 10 y 16 del Pacto. Está representada por la organización TRIAL (asociación suiza contra la impunidad). El Pacto y su Protocolo Facultativo entraron en vigor para Argelia el 12 de septiembre de 1989.

1.2 El 12 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones decidió, en nombre del Comité, rechazar la solicitud formulada por el Estado parte el 3 de marzo de 2009 de que el Comité examinara por separado las cuestiones de la admisibilidad y del fondo.

### Los hechos expuestos por la autora

2.1 La autora afirma que, el 30 de mayo de 1994 a las 9.00 horas, su esposo, Brahim Aouabdia, fue detenido en su lugar de trabajo por agentes de policía uniformados que le pidieron que subiera junto a tres de ellos a su propio coche. Los policías no presentaron ninguna orden de detención ni le informaron de los motivos de la detención. Muchas otras personas, incluidos miembros de los consejos municipales y diputados elegidos en las últimas elecciones legislativas anuladas, activistas o simples simpatizantes del Frente Islámico de Salvación (FIS), partido político prohibido, habían sido detenidas en Constantina en días anteriores y lo serían en días posteriores, en el marco de una gran redada policial<sup>1</sup>. Todas esas personas fueron llevadas a la Jefatura de Policía de Constantina y al menos algunas de ellas fueron trasladadas, tras días o semanas en régimen de incomunicación, al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar, que dependía del Departamento de Investigación y Seguridad (DRS), es decir, de los servicios de inteligencia del ejército. Todas ellas desaparecieron tras las detenciones. La detención de Brahim Aouabdia tuvo lugar en presencia de muchos testigos que abandonaron el lugar repentinamente por miedo a ser también detenidos. No obstante, un empleado del taller de confección en el que trabajaba la víctima y su cuñado permanecieron en el lugar y pudieron posteriormente describir a la autora las circunstancias de la detención.

2.2 Ese mismo día, cuando supo que habían detenido a su esposo, la autora fue a la comisaría de policía de Coudiat, sede de la policía judicial de la *wilaya* de Constantina, con la esperanza de verlo o tener noticias suyas, pero no se atrevió a entrar. Al ver el coche de su esposo aparcado frente a la comisaría, tuvo la confirmación de que había sido detenido. Durante varios días acudió periódicamente a la comisaría, sola o acompañada de sus hijos, esperando la liberación de su esposo. Su coche seguía aparcado en las proximidades. Los

<sup>1</sup> La autora nombra a otras diez personas que fueron presuntamente detenidas en esa redada, una de las cuales fue objeto de la comunicación N° 992/2001 presentada al Comité, *Bousroual c. Argelia*, dictamen aprobado el 30 de marzo de 2006. También hace referencia a los casos de secuestro y detención de casi un millar de personas a manos de distintos servicios de seguridad, identificados en la región por la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Constantina y comunicados al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

hijos de la autora señalaron asimismo haber visto regularmente a policías de paisano conducir el coche de su padre por las calles de la ciudad.

2.3 Después de dos semanas de espera, la autora acudió diariamente al Palacio de Justicia esperando que su esposo fuera llevado ante el fiscal y quedara así bajo la protección de la ley. A lo largo del mes de junio de 1994, pidió varias veces a la secretaria de la fiscalía de Constantina que le indicara la fecha en que sería llevado ante la justicia. A finales de ese mes escribió al fiscal de Constantina, que era territorialmente competente, para conocer los motivos de la detención de su esposo en régimen de incomunicación, cuando la duración máxima legal de la detención policial era de 12 días en el caso de los delitos más graves de subversión y terrorismo<sup>2</sup>. La fiscalía se negó a dar curso a su solicitud por considerar que no se trataba una denuncia formal; sin embargo, después de haber presentado formalmente una nueva denuncia por secuestro, la autora tampoco obtuvo respuesta.

2.4 Aun así, la autora siguió dirigiéndose a todos los organismos oficiales que podían intervenir para aclarar la situación de su esposo. Concretamente, escribió al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia y al Presidente de la República, sin obtener respuesta alguna. La autora también acudió al Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, institución pública encargada del seguimiento y la promoción de los derechos humanos, que le dijo que no tenía noticias de su esposo.

2.5 No fue hasta el 29 de marzo de 1997, casi tres años después de la detención y desaparición de su esposo, cuando un agente de la policía judicial citó a la autora a comparecer en la Jefatura de Policía de Constantina donde se le notificó que Brahim Aouabdia "había sido trasladado a sus dependencias y entregado posteriormente al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar de Constantina el 13 de julio de 1994". En la notificación no constaban ni la fecha ni los motivos de la detención, por lo que la autora se trasladó al cuartel del CTRI en Constantina para preguntar por su esposo, donde le dijeron que "nunca lo habían visto". Acudió de nuevo al fiscal para que tomara medidas en relación con la información contenida en la notificación, pero en vano. Más tarde supo que su marido y otras 22 personas, la mayoría de las cuales habían sido detenidas y habían desaparecido al mismo tiempo y en las mismas circunstancias, habían sido condenadas a muerte en rebeldía por el Tribunal Penal de Constantina<sup>3</sup> el 29 de julio de 1995. La autora pidió al fiscal de ese Tribunal información sobre esa condena, pero no recibió respuesta. El fiscal también se negó a entregarle una copia de la sentencia.

2.6 Sin embargo, la autora logró obtener una copia del auto de la Sala de recursos contra la instrucción de Constantina, de 6 de junio de 1995, por el que se daba traslado de la causa de Brahim Aouabdia y 22 otros coacusados al Tribunal Penal y, al considerarlos prófugos, se ordenaba su detención. De lo dispuesto en dicha decisión se desprende asimismo que se habían iniciado acciones penales contra todos ellos en virtud de un requerimiento de encausamiento dictado por el fiscal de Constantina el 12 de julio de 1994 por delitos presuntamente cometidos en la región. La autora alega que la información de que Brahim Aouabdia estaba prófugo en esa fecha contradice la notificación que se le entregó el 29 de marzo de 1997, según la cual este fue trasladado al CTRI el 13 de julio de 1994 y, por lo tanto, el 12 de julio de 1994 seguía detenido en las dependencias de la policía judicial.

2.7 La autora afirma que, dado que ella misma acudió al fiscal para denunciar la situación y que a finales de junio de 1994 le comunicó que su esposo permanecía detenido por la policía judicial en la Jefatura de Policía, el fiscal no podía ignorar la detención de su esposo en régimen de incomunicación en las dependencias de la policía judicial durante 43

<sup>2</sup> Artículo 22 de la Ley antiterrorista, de 30 de septiembre de 1992.

<sup>3</sup> La autora se remite a la comunicación N° 992/2001, *Bousroual c. Argelia*, véase la nota 1 *supra*, párr. 6.

días, ni su entrega a la DRS y posterior desaparición, más aún cuando el fiscal es, en virtud del Código de Procedimiento Penal, la autoridad legal encargada de supervisar la detención en las dependencias de la policía judicial. La autora sostiene que el fiscal, en cuanto tuvo conocimiento de los actos constitutivos de secuestro, debería haber pedido la apertura de un sumario o de una investigación. Aunque la fiscalía solicitó finalmente a la policía judicial que entregara un atestado a la autora, nunca llegó a darle el seguimiento prescrito por la ley.

2.8 A pesar de tener a sus hijos a cargo, la autora nunca dejó de buscar a su esposo ni de tratar de conocer la verdad sobre su situación. Dados los obstáculos administrativos que entrañaba su desaparición, la autora se vio obligada a solicitar una declaración de fallecimiento en el marco del Decreto N° 6/01 por el que se aplicaba la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional (27 de febrero de 2006). Así, pidió un "certificado de desaparición", que fue emitido el 19 de marzo de 2007 por los servicios de seguridad de la *wilaya* de Constantina en aplicación del artículo 28 del decreto mencionado, en el que se establece que "después de la investigación y la búsqueda infructuosas realizadas por este servicio, se considera que el Sr. Brahim Aouabdia está desaparecido". La autora subraya que son los mismos servicios responsables de la desaparición de Brahim Aouabdia los que emitieron ese certificado. En virtud del mismo, la autora obtuvo una declaración judicial de fallecimiento, de fecha 23 de mayo de 2007, emitida por el Tribunal de Constantina. Posteriormente se emitió una partida de defunción. La autora señala que la fecha de fallecimiento declarada por el juez (30 de mayo de 1994) coincide con la de la detención de Brahim Aouabdia por la policía judicial pese a que, según el atestado elaborado por el CTRI, este fue entregado a ese servicio el 13 de julio de 1994 y, por lo tanto, seguía vivo en ese momento<sup>4</sup>. A pesar de esa declaración judicial, la autora sostiene que ni ella ni sus hijos han podido recuperar la paz y la serenidad ni llorar a su padre y esposo. Siguen creyendo que, pese al tiempo transcurrido, Brahim Aouabdia aún puede estar vivo y recluido en algún campamento secreto. La autora añade que las consecuencias psicológicas y materiales de su desaparición para la familia son incalculables.

### **La denuncia**

3.1 La autora afirma que los hechos en que se sustenta su denuncia ponen de manifiesto que su esposo fue víctima de una desaparición forzada<sup>5</sup> desde su detención el 30 de mayo de 1994 y que esa situación persiste al día de hoy. A la detención por funcionarios del Estado parte debe sumarse una negativa a reconocer su privación de libertad y la ocultación de su situación. Después de 13 años de desaparecido<sup>6</sup>, las posibilidades de encontrar a Brahim Aouabdia con vida son cada vez menores y la emisión de una declaración de fallecimiento hace temer a la autora que su esposo haya fallecido a raíz de la desaparición forzada que siguió a su detención. La autora señala que, en las circunstancias del caso, el Estado parte no trató en ningún momento de aclarar su situación y, citando a la observación general del Comité relativa al artículo 6, afirma que Brahim Aouabdia fue víctima de una violación del artículo 6 en sí mismo y leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

3.2 La autora alega además que la desaparición forzada de Brahim Aouabdia y la angustia y el sufrimiento resultantes constituyen un trato a su respecto contrario a lo dispuesto en el artículo 7.

---

<sup>4</sup> Véase el párrafo 2.5 *supra*.

<sup>5</sup> La autora se remite a la definición de "desaparición forzada" del artículo 7, párr. 2 i), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como a la del artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

<sup>6</sup> Casi 17 años hoy.

3.3 La autora alega que la desaparición de Brahim Aouabdia ha sido para ella y para sus hijos una experiencia paralizante, dolorosa y angustiosa porque no saben nada de él y porque, si ha muerto, no conocen las circunstancias de su fallecimiento ni saben dónde está enterrado. Esta incertidumbre, que ha sido una fuente de profundo y constante sufrimiento para toda la familia, persiste desde el 29 de mayo de 1994. Desde esa fecha las autoridades no han tratado en ningún momento de aliviar su agonía realizando una investigación efectiva. La autora afirma que, al actuar de ese modo, el Estado parte ha violado los derechos que les asisten tanto a ella como a sus hijos en virtud del artículo 7 del Pacto.

3.4 En lo referente al artículo 9 del Pacto, la autora recuerda que su esposo fue detenido por la policía judicial de Constantina sin que mediara una orden de detención y sin que se le comunicaran los motivos de la detención. No ha sido visto desde entonces. Posteriormente fue confinado arbitrariamente y en régimen de incomunicación del 30 de mayo al 13 de julio de 1994, es decir, durante 43 días, por la policía judicial, antes de ser entregado al DRS, donde también permaneció detenido durante un período indefinido. La autora afirma que, al actuar así, el Estado parte infringió lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, en perjuicio de Brahim Aouabdia.

3.5 La autora añade que, dado que no le fueron notificadas en ningún momento las acusaciones formuladas contra la víctima y que esta fue juzgada y condenada en rebeldía cuando aún no había sido puesto en libertad, también se violaron los derechos que le amparaban en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Pacto. Por otra parte, y pese al proceso judicial incoado en su contra, Brahim Aouabdia no fue llevado sin demora ante un juez u otro funcionario judicial, al estar en situación de incomunicación. Por lo tanto, la autora afirma que su esposo también fue víctima de una violación del artículo 9, párrafo 3. Por último, alega que Brahim Aouabdia también fue víctima de una vulneración del artículo 9, párrafo 4, puesto que se le negó el derecho a impugnar la legalidad de su detención al estar privado de todo contacto con el exterior, primero en las dependencias de la policía y después en el DRS a partir del 13 de julio de 1994, por lo que le fue materialmente imposible impugnar la legalidad de su detención o pedir al juez su puesta en libertad.

3.6 Asimismo, la autora sostiene que, dada su situación de incomunicación, en violación del artículo 7 del Pacto, su esposo no fue tratado humanamente ni con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por consiguiente, afirma que su esposo fue víctima de una violación por el Estado parte del artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

3.7 La autora alega además que, al haber sido víctima de una desaparición forzada, Brahim Aouabdia se vio privado del derecho a ser reconocido como titular de derechos y obligaciones, es decir, se le impuso la condición de "no persona", lo que supone una violación del artículo 16 del Pacto por el Estado parte.

3.8 La autora sostiene por otra parte que, al no adoptar ninguna medida en respuesta a sus gestiones para aclarar la situación de su esposo, el Estado parte incumplió su obligación de garantizar a Brahim Aouabdia un recurso efectivo, puesto que debía haber realizado una investigación exhaustiva y diligente sobre su desaparición. Afirma que la falta de un recurso efectivo es aún más evidente si se tiene en cuenta que se decretó una amnistía total y general que garantizaba la impunidad de los responsables de violaciones. Según la autora, el Estado parte violó los derechos que asistían a su esposo en virtud del artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

3.9 En lo que respecta a la cuestión del agotamiento de los recursos internos, la autora alega que todas las gestiones que ha realizado a lo largo de 13<sup>7</sup> años han resultado infructuosas, ya que las autoridades nunca investigaron la desaparición de su esposo ni respondieron a las graves acusaciones formuladas contra los policías responsables de la

<sup>7</sup> Casi 17 años hoy.

desaparición. No ha obtenido respuesta a las cartas que ha enviado periódicamente desde 1994 a las más altas autoridades del Estado. Subsidiariamente, la autora afirma que se enfrenta a la imposibilidad legal de recurrir a una instancia judicial tras la promulgación del Decreto N° 6/01 por el que se aplica la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, que prohíbe, so pena de prisión, recurrir a los tribunales para aclarar los delitos más graves, como las desapariciones forzadas<sup>8</sup>. No solo todos los recursos interpuestos por la autora fueron inútiles e inefectivos, sino que además ya no están disponibles. Por consiguiente, la autora sostiene que, para que su comunicación sea declarada admisible por el Comité, ya no está obligada a proseguir sus gestiones y procedimientos internos y exponerse así a incurrir en responsabilidad penal.

### **Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad**

4.1 El 3 de marzo de 2009, el Estado parte impugnó la admisibilidad de la comunicación, así como la de otras diez comunicaciones presentadas al Comité de Derechos Humanos, en un "memorando de referencia sobre la inadmisibilidad de las comunicaciones presentadas al Comité de Derechos Humanos en relación con la aplicación de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional". El Estado parte considera, en efecto, que las comunicaciones en que se afirma la responsabilidad de funcionarios públicos, o que ejerzan sus funciones bajo la autoridad de los poderes públicos, en los casos de desapariciones forzadas ocurridos en el período de que se trata, es decir, de 1993 a 1998, han de considerarse en su conjunto, puesto que hay que situar los hechos denunciados en el contexto sociopolítico y de seguridad interno de un período en el que el Gobierno tuvo que combatir el terrorismo en condiciones difíciles.

4.2 Durante ese período, el Gobierno tuvo que luchar contra grupos no estructurados. En consecuencia, hubo varias intervenciones en la población civil, en condiciones confusas. Resultaba difícil a los civiles distinguir entre las intervenciones de los grupos terroristas y las de las fuerzas de seguridad y en numerosas ocasiones atribuyeron las desapariciones forzadas a estas últimas. Así pues, los casos de desaparición forzada son numerosos pero, según el Estado parte, no son achacables al Gobierno. El Estado parte considera que, sobre la base de datos documentados por numerosas fuentes independientes, en particular la prensa y organizaciones de derechos humanos, los casos de desaparición de personas en Argelia durante el período de referencia pueden clasificarse en seis categorías, ninguna de las cuales es imputable al Estado. La primera es la de las personas cuyos allegados declararon desaparecidas, cuando en realidad habían ingresado en la clandestinidad por voluntad propia para unirse a los grupos armados y habían pedido a sus familiares que declarasen que habían sido detenidas por los servicios de seguridad para "borrar las pistas" y evitar el "hostigamiento" de la policía. El segundo caso es el de aquellos cuya desaparición se denunció después de ser detenidos por los servicios de seguridad, pero que, una vez liberados, aprovecharon la situación para ingresar en la clandestinidad. El tercero es el de los desaparecidos que fueron secuestrados por grupos armados, los cuales, al no estar identificados o haber actuado utilizando uniformes o documentos de identidad de

<sup>8</sup> La autora señala que la Carta rechaza "toda acusación que apunte a imputar al Estado la responsabilidad de un fenómeno de desaparición". Además, el Decreto promulgado el 27 de febrero de 2006 prohíbe acudir a los tribunales so pena de incurrir en responsabilidad penal y, por consiguiente, exime a las víctimas de la obligación de agotar los recursos internos. El decreto prohíbe denunciar a las fuerzas de orden público y de seguridad por desapariciones u otros delitos (art. 45). La autora añade que el decreto impone la inadmisibilidad de esas denuncias o reclamaciones por la autoridad judicial competente. Asimismo, incurre en responsabilidad penal quien "por sus declaraciones, escritos o cualquier otro acto utilice o instrumentalice las secuelas de la tragedia nacional para perjudicar a las instituciones de la República Argelina Democrática y Popular, debilitar el Estado, atentar contra el honor de sus agentes (...) o empañar la imagen de Argelia en el plano internacional" (art. 46).



policías o militares, fueron confundidos con agentes de las fuerzas armadas o de los servicios de seguridad. Están en la cuarta categoría las personas buscadas por sus allegados que tomaron la iniciativa de abandonar a su familia o incluso salir del país por problemas personales o litigios familiares. En quinto lugar están las personas cuya desaparición ha sido denunciada por sus familiares y que en realidad eran terroristas perseguidos, muertos y enterrados en la clandestinidad de resultas de "guerras entre facciones" o "guerras doctrinales", o bien de un conflicto entre grupos armados rivales por el reparto del botín. El Estado parte menciona por último una sexta posibilidad, la de aquellas personas que son buscadas porque se las considera desaparecidas y se encuentran en el territorio nacional o en el extranjero viviendo bajo una falsa identidad gracias a una red colosal de falsificación de documentos.

4.3 El Estado parte subraya que, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de las situaciones que abarca la noción genérica de desaparición, el legislador argelino, a raíz del plebiscito popular de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, propuso que la cuestión de los desaparecidos se tratase en un marco integral en el cual la responsabilidad por todas las desapariciones se asumiría en el contexto de la tragedia nacional, proporcionando apoyo a todas las víctimas para que pudieran superar el trauma y reconociendo el derecho a reparación de todos los desaparecidos y sus derechohabientes. Con arreglo a las estadísticas preparadas por los servicios del Ministerio del Interior, se declararon 8.023 casos de desaparición y se examinaron 6.774 expedientes: en 5.704 expedientes se concedió una indemnización y en 934 se denegó; siguen examinándose 136 expedientes. Se han pagado 371.459.390 DA a título de resarcimiento a todas las víctimas afectadas. A esta cifra deben añadirse 1.320.824.683 DA pagados en forma de pensiones mensuales.

4.4 El Estado parte señala además que no se han agotado todos los recursos internos. Insiste en la importancia de distinguir entre las simples gestiones ante autoridades políticas o administrativas, el recurso no contencioso ante órganos consultivos o de mediación y los recursos contenciosos ante las diversas instancias jurisdiccionales competentes. El Estado parte observa que de las declaraciones de los autores<sup>9</sup> se desprende que enviaron cartas a autoridades políticas o administrativas, recurrieron a órganos consultivos o de mediación y elevaron una solicitud a representantes de la fiscalía (fiscales generales o fiscales de la República), sin que se interpusiera un recurso judicial propiamente dicho ni se ejercieran todos los recursos disponibles en apelación o casación. De todas estas autoridades, solo los representantes del ministerio público están habilitados por la ley a abrir una investigación preliminar y someter el asunto al juez de instrucción. En el sistema judicial argelino, el Fiscal de la República recibe las denuncias y, en su caso, inicia la acción pública. No obstante, para proteger los derechos de las víctimas o de sus derechohabientes, el Código de Procedimiento Penal autoriza a estos últimos a intervenir en el procedimiento constituyéndose directamente en parte civil ante el juez de instrucción. En tal caso, es la víctima y no el fiscal la que ejerce la acción pública al someter el caso al juez de instrucción. Este recurso, previsto en los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Penal, no fue utilizado, cuando habría bastado que las víctimas ejercieran la acción pública, obligando al juez de instrucción a abrir un procedimiento de información aunque la fiscalía hubiese decidido otra cosa.

4.5 El Estado parte observa además que, según los autores, la aprobación por referéndum de la Carta y sus reglamentos de aplicación, en particular el artículo 45 del Decreto N° 6/01, hacen imposible pensar que existan en Argelia recursos internos efectivos, útiles y disponibles para los familiares de las víctimas de desapariciones. Sobre esta base,

<sup>9</sup> El Estado parte dio una respuesta global a 11 comunicaciones distintas, por lo que en su memorando habla de los "autores", incluida la autora de la presente comunicación.

los autores se creyeron exentos de la obligación de someter el asunto a las jurisdicciones competentes, prejuzgando la posición de estas y su apreciación en la aplicación de dicho decreto. Ahora bien, los autores no pueden hacer valer ese decreto y sus reglamentos de aplicación para eximirse de recurrir a los procedimientos judiciales disponibles. El Estado parte recuerda la jurisprudencia del Comité según la cual "la creencia o la presunción subjetiva de una persona en cuanto al carácter inútil de un recurso no la exime de agotar todos los recursos internos"<sup>10</sup>.

4.6 El Estado parte se refiere a continuación a la naturaleza, los fundamentos y el contenido de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional y sus reglamentos de aplicación. Dice que, en virtud del principio de inalienabilidad de la paz, que se ha convertido en un derecho internacional a la paz, se invita al Comité a acompañar y consolidar esta paz y a favorecer la reconciliación nacional a fin de que los Estados afectados por crisis internas puedan reforzar su capacidad. En el marco de este proceso de reconciliación nacional, el Estado aprobó la mencionada Carta, cuyo decreto de aplicación contiene disposiciones jurídicas que prevén la extinción de la acción pública y la conmutación o reducción de las penas de las personas culpables de actos terroristas o que se hayan beneficiado de la discordia civil, con excepción de los autores o cómplices de matanzas colectivas, violaciones o atentados con explosivos en lugares públicos. El decreto prevé asimismo medidas de apoyo para resolver la cuestión de los desaparecidos mediante un procedimiento consistente en una declaración judicial de fallecimiento que da derecho a una indemnización para los derechohabientes, considerados víctimas de la tragedia nacional. Además, se han adoptado medidas de carácter socioeconómico, como ayudas para la reinserción profesional o indemnizaciones para todas las víctimas reconocidas de la tragedia nacional. Por último, el decreto prevé medidas políticas, como la prohibición de ejercer una actividad política a quienes hayan utilizado la religión como instrumento en la tragedia nacional y la inadmisibilidad de las denuncias individuales o colectivas contra las fuerzas de defensa y seguridad de la República, sin distinción alguna, por actos encaminados a la protección de las personas y los bienes, la salvaguardia de la nación y la preservación de las instituciones de la República.

4.7 Según el Estado parte, además de la creación de fondos de indemnización para todas las víctimas de la tragedia nacional, el pueblo soberano de Argelia ha aceptado iniciar un proceso de reconciliación nacional como único medio de que cicatricen las heridas. El Estado parte insiste en que la proclamación de la Carta refleja la voluntad de evitar situaciones de enfrentamiento judicial, revelaciones sensacionalistas en los medios de comunicación o ajustes de cuentas políticos. El Estado parte considera, pues, que los hechos alegados por los autores están comprendidos en el mecanismo general interno de conciliación previsto en la Carta.

4.8 El Estado parte pide al Comité que constate la similitud de los hechos y las situaciones descritas por los autores, así como el contexto sociopolítico y de seguridad en el cual se produjeron; que constate también que los autores no han agotado todos los recursos internos y que tenga en cuenta que las autoridades del Estado parte han establecido un mecanismo interno para tratar y resolver globalmente los casos planteados en las comunicaciones en el marco de un dispositivo de paz y reconciliación nacional conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los subsiguientes pactos y convenciones, y que dictamine la inadmisibilidad de dichas comunicaciones y recomiende a los autores que recurran a la instancia competente.

<sup>10</sup> El Estado parte se remite en particular a las comunicaciones Nos. 210/1986 y 225/1987, *Pratt y Morgan c. Jamaica*, dictámenes aprobados el 6 de abril de 1989.

### **Observaciones adicionales del Estado parte sobre la admisibilidad**

5.1 El 9 de octubre de 2009, el Estado parte envió al Comité un memorando complementario en el que se preguntaba si la presentación de una serie de comunicaciones individuales al Comité no representaba una distorsión del procedimiento encaminada a someter al Comité una cuestión histórica global cuyas causas y circunstancias escapan a su competencia. El Estado parte observa a este respecto que las comunicaciones "individuales" se centran en el contexto general en el que se produjeron las desapariciones, considerando únicamente la actuación de las fuerzas de seguridad sin mencionar ni una sola vez a los distintos grupos armados que adoptaron técnicas delictivas de camuflaje para endosar la responsabilidad a las fuerzas armadas.

5.2 El Estado parte insiste en que no se pronunciará sobre las cuestiones de fondo relativas a las mencionadas comunicaciones hasta que se haya tomado una decisión con respecto a la admisibilidad; que la obligación primera de todo órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional es tratar las cuestiones previas antes de debatir el fondo de la cuestión. Según el Estado parte, la decisión de imponer el examen conjunto y concomitante de las cuestiones relativas a la admisibilidad y al fondo en estos casos, aparte de no haber sido concertada, redundaría en grave desmedro de la posibilidad de tramitar de manera adecuada las comunicaciones presentadas, tanto respecto de su carácter general como de sus particularidades intrínsecas. Refiriéndose al reglamento del Comité de Derechos Humanos, el Estado parte observa que las secciones relativas al examen de la admisibilidad de las comunicaciones por el Comité no son las mismas que las referentes al examen sustantivo y, por consiguiente, los dos exámenes podrían hacerse por separado. En lo relativo en particular al agotamiento de los recursos internos, el Estado parte subraya que ninguna de las comunicaciones presentadas por los autores fue objeto de una tramitación judicial interna, que habría permitido su examen por las autoridades judiciales nacionales. Solo algunas de las comunicaciones presentadas llegaron hasta la Sala de recursos contra la instrucción, que es una sala de instrucción de segunda instancia de los tribunales.

5.3 Recordando la jurisprudencia del Comité respecto de la obligación de agotar los recursos internos, el Estado parte destaca que ni la simple duda sobre las perspectivas de que el recurso prospere ni el temor a demoras eximen a los autores de esa obligación. En cuanto a la afirmación de que la promulgación de la Carta hace imposible todo recurso en la materia, el Estado parte responde que el hecho de que los autores no hicieran ninguna gestión para demostrar la veracidad de las denuncias formuladas ha impedido hasta ahora a las autoridades argelinas tomar una posición respecto del alcance y los límites de la aplicabilidad de las disposiciones de la Carta. Además, el decreto solo prescribe la inadmisibilidad de las acciones judiciales iniciadas contra "las fuerzas de defensa y seguridad de la República" por actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, es decir, la protección de las personas y los bienes, la salvaguardia de la nación y la preservación de las instituciones. En cambio, la denuncia de un acto imputable a las fuerzas de defensa y seguridad, cuando pueda demostrarse que se produjo al margen de estas funciones, puede dar lugar a la apertura de una instrucción en las jurisdicciones competentes.

5.4 Por último, el Estado parte reitera su posición acerca de la pertinencia del mecanismo de conciliación establecido por la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional. Señala a ese respecto que la autora se acogió al procedimiento previsto para la declaración del fallecimiento de su esposo, que confiere el derecho a percibir una indemnización, pese a que al mismo tiempo condenaba ese sistema.

## Deliberaciones del Comité

### *Examen de la admisibilidad*

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2 En cumplimiento del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité debe cerciorarse de que el mismo asunto no esté siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional. El Comité observa que la desaparición de Brahim Aouabdia fue señalada al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. No obstante, recuerda que los procedimientos o mecanismos especiales establecidos por la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos con el mandato de examinar la situación de los derechos humanos en un determinado país o territorio o las violaciones masivas de los derechos humanos en todo el mundo e informar públicamente al respecto no constituyen por lo general un procedimiento de examen o arreglo internacional en el sentido del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo<sup>11</sup>. Por consiguiente, el Comité considera que el examen del caso de Brahim Aouabdia por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias no hace que la comunicación sea inadmisibile en virtud de esa disposición.

6.3 El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que la autora no agotó los recursos internos porque no consideró la posibilidad de someter el caso al juez de instrucción constituyéndose en parte civil. Observa que, a finales de junio de 1994, la autora escribió al fiscal de Constantina para que le comunicara las razones de la situación de incomunicación de su esposo y que posteriormente presentó una denuncia formal de secuestro, pero que no obtuvo respuesta a esa denuncia. Por otra parte, el 29 de marzo de 1997 le notificaron que su esposo "había sido trasladado a sus dependencias y entregado posteriormente al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar de Constantina el 13 de julio de 1994". Sus intentos de que el fiscal diera seguimiento a dicha notificación resultaron infructuosos. Asimismo, presuntamente se dictó una orden de arresto contra el esposo de la autora y este fue condenado a muerte en rebeldía. No obstante, la autora no pudo obtener ninguna confirmación de esa condena ni una copia oficial de la sentencia. El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual la autora debe ejercitar todos los recursos judiciales a efectos de cumplir el requisito de agotamiento de todos los recursos disponibles de la jurisdicción interna, en la medida en que parezcan ser eficaces en el presente caso y que de hecho estén a disposición de la autora<sup>12</sup>. En las circunstancias del caso, el Comité considera que la constitución en parte civil por delitos tan graves como los que se alegan no puede sustituir al encausamiento al que debía haber procedido el propio fiscal, y mucho menos cuando la autora había denunciado directamente ante este la situación de su esposo. Por consiguiente, el Comité considera que el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta a la admisibilidad de la comunicación.

6.4 El Comité considera que la autora ha fundamentado suficientemente sus denuncias por cuanto plantean cuestiones relacionadas con el artículo 6, párrafo 1; el artículo 7; el artículo 9, párrafos 1 a 4; el artículo 10; el artículo 16; y el artículo 2, párrafo 3; del Pacto, por lo que procede a examinar la comunicación en cuanto al fondo.

---

<sup>11</sup> Comunicación N° 540/1993, *Celis Laureano c. el Perú*, dictamen aprobado el 25 de marzo de 1996, párr. 7.1.

<sup>12</sup> Comunicación N° 1003/2001, *P. L. c. Alemania*, decisión sobre la admisibilidad adoptada el 22 de octubre de 2003, párr. 6.5. Véase también la comunicación N° 433/1990, *A. P. A. c. España*, decisión sobre la admisibilidad 25 adoptada el 25 de marzo de 1994, párr. 6.2.

*Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

7.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

7.2 Debe reconocerse que el Estado parte se ha limitado a sostener que las comunicaciones en que se denuncia la responsabilidad de agentes públicos o que ejerzan bajo la autoridad de las autoridades públicas de darse casos de desapariciones forzadas durante el período examinado, es decir, de 1993 a 1998, deben ser tratadas en un marco global, pues los hechos denunciados deben ser enmarcados en el contexto interno sociopolítico y de seguridad de un período en el que el Gobierno tuvo que afrontar en condiciones difíciles el terrorismo; que, por consiguiente, el Comité no puede examinarlas en el marco del mecanismo de denuncias individuales. El Comité quiere recordar las observaciones finales que dirigió a Argelia en su 91º período de sesiones<sup>13</sup> y su jurisprudencia<sup>14</sup>, según la cual el Estado parte no debería hacer valer las disposiciones de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional contra quienes hagan valer las disposiciones del Pacto o hayan presentado o presenten comunicaciones al Comité. Como subrayó en sus observaciones finales a Argelia<sup>15</sup>, a juicio del Comité la Ordenanza N° 6-01 sin la modificación que recomendó parece promover la impunidad y no puede, pues, en su estado actual, ser compatible con las disposiciones del Pacto. El Comité rechaza por otra parte el argumento del Estado parte de que el hecho de que la autora no haya hecho ninguna gestión para demostrar la veracidad de las denuncias formuladas ha impedido hasta ahora a las autoridades argelinas tomar una posición respecto del alcance y los límites de la aplicabilidad de las disposiciones de la mencionada Carta.

7.3 El Comité recuerda sus dictámenes en comunicaciones anteriores<sup>16</sup> y observa que el Estado parte no ha respondido a las denuncias de la autora en cuanto al fondo. Reitera además que la carga de la prueba no debe recaer exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de la información necesaria<sup>17</sup>. Del artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo se desprende que el Estado parte está obligado a investigar de buena fe todas las denuncias de violación del Pacto que se hayan formulado contra él y contra sus representantes y a transmitir al Comité la información que obre en su poder.

7.4 En lo que respecta a la presunta situación de incomunicación del esposo de la autora, el Comité es consciente del sufrimiento que acarrea la privación indefinida de libertad sin contacto con el exterior. Recuerda su Observación general N° 20 sobre el artículo 7, en la que recomienda a los Estados partes que adopten disposiciones contra la detención en régimen de incomunicación. Observa que Brahim Aouabdia fue detenido el 30 de mayo de 1994, llevado a la Jefatura de Policía de Constantina y posteriormente trasladado al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar. Estos hechos le fueron confirmados oficialmente a la autora en un atestado de la policía judicial de 13 de julio de 1994. Durante todo ese tiempo, Brahim Aouabdia permaneció detenido en régimen de

<sup>13</sup> CCPR/C/DZA/CO/3, párr. 7 a).

<sup>14</sup> Comunicación N° 1196/2003, *Boucherf c. Argelia*, dictamen aprobado el 30 de marzo de 2006, párr. 11; comunicación N° 1588/2007, *Benaziza c. Argelia*, dictamen aprobado el 26 de julio de 2010, párr. 9.2.

<sup>15</sup> CCPR/C/DZA/CO/3, párr. 7.

<sup>16</sup> Véase, entre otras, la comunicación N° 1640/2007, *El Abani c. Libia*, dictamen aprobado el 26 de julio de 2010, párr. 7.4.

<sup>17</sup> Véanse las comunicaciones N° 1422/2005, *El Hassy c. Libia*, nota 16 *supra*, párr. 6.7; N° 139/1983, *Conteris c. el Uruguay*, dictamen aprobado el 17 de julio de 1985, párr. 7.2; y N° 1297/2004, *Medjnoune c. Argelia*, dictamen aprobado el 14 de julio de 2006, párr. 8.3.

incomunicación. Al parecer, fue posteriormente condenado a muerte en rebeldía por el Tribunal Penal de Constantina el 29 de julio de 1995, pero la autora nunca pudo obtener la confirmación de esa condena.

7.5 El Comité concluye, sobre la base de los elementos que tiene ante sí, que el hecho de haber mantenido a Brahim Aouabdia recluido en régimen de incomunicación desde 1994 e impedirle comunicarse con su familia y con el exterior constituye una violación de los derechos que le amparan en virtud del artículo 7 del Pacto<sup>18</sup>.

7.6 En lo que respecta a su esposa, Mériem Zarzi, y a sus seis hijos, el Comité toma nota de la angustia y el sufrimiento que les ha ocasionado la desaparición de Brahim Aouabdia, del que no tienen ninguna noticia desde hace ya casi 17 años. Aunque supieron indirectamente que Brahim Aouabdia había sido condenado a muerte en rebeldía, esa información nunca fue confirmada oficialmente y se vieron obligados a solicitar un "certificado de desaparición", y posteriormente una declaración judicial de fallecimiento, sin que se realizara ninguna investigación efectiva para aclarar la suerte de la víctima. Por consiguiente, el Comité dictamina que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación de los derechos que asisten a la autora y sus seis hijos con arreglo al artículo 7, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto<sup>19</sup>.

7.7 En lo tocante a la denuncia de violación del artículo 9, la información de que dispone el Comité muestra que Brahim Aouabdia fue detenido por agentes del Estado parte sin que mediara una orden judicial y que posteriormente fue recluido en régimen de incomunicación sin acceso a un abogado y sin que se le informara en ningún momento de los motivos de su detención ni de las acusaciones en su contra. Asimismo, fue presuntamente condenado a muerte en rebeldía el 29 de julio de 1995 por el Tribunal Penal de Constantina. El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 4, el control judicial de la legalidad de la detención debe incluir la posibilidad de que se ordene la puesta en libertad si la detención se declarara incompatible con las disposiciones del Pacto, en particular las del artículo 9, párrafo 1. A falta de explicaciones pertinentes del Estado parte, el Comité llega a la conclusión de que la reclusión de Brahim Aouabdia violó el artículo 9<sup>20</sup>.

7.8 En cuanto a la denuncia de la autora en relación con el artículo 10, párrafo 1, el Comité reitera que las personas privadas de libertad no pueden ser sometidas a penurias o a restricciones que no sean las que resulten de la privación de la libertad, y que deben ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad. Dado que el Estado parte no facilitó ninguna información sobre el trato dispensado a Brahim Aouabdia durante su reclusión en régimen de incomunicación en las dependencias de la Jefatura de Policía de Constantina y del Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar donde permaneció detenido, el Comité concluye que se han violado los derechos que le amparan en virtud del artículo 10, párrafo 1, del Pacto<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Véanse las comunicaciones N° 1295/2004, *El Awani c. Libia*, dictamen aprobado el 11 de julio de 2007, párr. 6.5; N° 1422/2005, *El Hassy c. Libia*, nota 16 *supra*, párr. 6.2; N° 540/1993, *Celis Laureano c. el Perú*, dictamen aprobado el 25 de marzo de 1996, párr. 8.5, y N° 458/1991, *Mukong c. el Camerún*, dictamen aprobado el 21 de julio de 1994, párr. 9.4.

<sup>19</sup> Véanse las comunicaciones N° 1640/2007, *El Abani c. Libia*, nota 16 *supra*, párr. 7.5; N° 1422/2005, *El Hassy c. Libia*, nota 16 *supra*, párr. 6.11; N° 107/1981, *Quinteros c. el Uruguay*, dictamen aprobado el 21 de julio de 1983, párr. 14, y N° 950/2000, *Sarma c. Sri Lanka*, dictamen aprobado el 31 de julio de 2003, párr. 9.5.

<sup>20</sup> Véase la comunicación N° 1297/2004, *Medjnoune c. Argelia*, dictamen aprobado el 14 de julio de 2006, párr. 8.5.

<sup>21</sup> Véanse la Observación general N° 21 [44] sobre el artículo 10, párr. 3, y las comunicaciones N° 1134/2002, *Gorji-Dinka c. el Camerún*, dictamen aprobado el 17 de marzo de 2005, párr. 5.2, y N° 1422/2005, *El Hassy c. Libia*, nota 16 *supra*, párr. 6.4.

7.9 En lo que respecta al artículo 16, el Comité reitera su jurisprudencia constante según la cual la sustracción intencional de una persona del amparo de la ley por un período prolongado puede constituir una denegación del reconocimiento de su personalidad jurídica si la víctima estaba en poder de las autoridades del Estado cuando se la vio por última vez y si los esfuerzos de sus allegados por acceder a recursos efectivos, en particular ante los tribunales, son obstaculizados sistemáticamente<sup>22</sup>. En el presente caso, y pese a que reconocieron la reclusión de la víctima al notificar a su esposa su detención por la policía judicial, su retención bajo custodia y su posterior traslado al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar, las autoridades del Estado no proporcionaron sin embargo ninguna información adicional al respecto. El Comité concluye que la desaparición forzada de Brahim Aouabdia durante casi 17 años le sustrajo del amparo de la ley durante ese período y le privó de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en violación del artículo 16 del Pacto.

7.10 La autora hace valer también el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, conforme al cual los Estados partes deben velar por que toda persona pueda ejercer un recurso asequible, efectivo y ejecutorio para defender los derechos consagrados en el Pacto. El Comité reitera la importancia que atribuye a que los Estados partes instituyan mecanismos judiciales y administrativos apropiados para examinar las denuncias de violación de derechos en su ordenamiento jurídico interno. Se remite a su Observación general N° 31, según la cual la falta de realización por un Estado parte de una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría de por sí constituir una violación separada del Pacto<sup>23</sup>. En el presente caso, la información en poder del Comité indica que Brahim Aouabdia no tuvo acceso a un recurso efectivo, y por ello el Estado parte faltó a su obligación de proteger la vida de Brahim Aouabdia, motivo por el cual el Comité llega a la conclusión de que la exposición de los hechos que le han sido denunciados pone de manifiesto una violación del artículo 6, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

7.11 Habiendo adoptado una decisión sobre la violación del artículo 6, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, el Comité no considera necesario examinar por separado las denuncias que se formularon haciendo valer únicamente el artículo 6.

8. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 6, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, del artículo 7, del artículo 9, del artículo 10, párrafo 1, y del artículo 16 con respecto a Brahim Aouabdia. De los hechos se desprende también la existencia de una violación del artículo 7, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, con respecto a la autora (esposa de la víctima) y los seis hijos del matrimonio.

9. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, el Estado parte está obligado a proporcionar a la autora un recurso efectivo que incluya: i) la investigación exhaustiva y rigurosa de la desaparición de Brahim Aouabdia; ii) la presentación a su familia de información detallada sobre los resultados de la investigación; iii) su puesta en libertad inmediata en caso de seguir recluso en régimen de incomunicación; iv) en caso de que Brahim Aouabdia hubiera fallecido, la entrega de sus restos a su familia; v) el encausamiento, enjuiciamiento y castigo de los responsables de las violaciones cometidas, y vi) una indemnización adecuada a la autora y su familia por las violaciones cometidas y a

<sup>22</sup> Comunicaciones N° 1327/2004, *Grioua c. Argelia*, dictamen aprobado el 10 de julio de 2007, párr. 7.8, y N° 1495/2006, *Zohra Madaoui c. Argelia*, dictamen aprobado el 28 de octubre de 2008, párr. 7.7.

<sup>23</sup> Párrs. 15 y 18.

Brahim Aouabdia si sigue vivo. Además, el Estado parte tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto francés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]



## Apéndice

### Voto particular del Sr. Rafael Rivas Posada (parcialmente disidente)

En el párrafo 7.11 de la decisión del Comité de Derechos Humanos sobre la comunicación *Zarzi c. Argelia* se dice que, habiendo adoptado el Comité una decisión sobre la violación del artículo 6 del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, no considera necesario examinar por separado las denuncias formuladas que invocan únicamente el artículo 6. Sin embargo, en el párrafo 7.10 el Comité afirma que, como la víctima Brahim Aouabdia no gozó de la protección a su derecho a la vida que debía prestarle el Estado parte, este violó directamente el artículo 6, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Y en el párrafo 8 de la decisión concluye en la violación del artículo 6, con la misma formulación anterior.

No comparto la jurisprudencia del Comité en el sentido de que en los casos de desaparición forzada, cuando el Estado parte no ha cumplido con su obligación de proteger el derecho a la vida de los individuos y, además, no ha investigado debidamente las circunstancias de esa desaparición, pero no hay prueba fehaciente de la muerte de la víctima, se tipifica la violación directa del artículo 6 del Pacto. A mi juicio no se justifica una interpretación extensiva de este artículo, para aplicarlo aun a casos en que no hay privación de la vida, lo cual es equivocado. Sin duda hay que relacionar el comportamiento violatorio del Estado parte con el derecho a la vida, pero no necesariamente para concluir que existe una violación directa de ese derecho, cuando no esta comprobada la muerte de la víctima.

Por la razón expuesta, considero que la formulación del párrafo 8 de la decisión ha debido ser que el Comité "dictamina que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 2, párrafo 3, del Pacto, leído en relación con el artículo 6" y no la redacción inversa utilizada por el Comité.

En todo lo demás estoy de acuerdo con la decisión del Comité.

(Firmado) Sr. Rafael **Rivas Posada**

[Hecho en español, francés e inglés, siendo el español la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

### **Voto particular del Sr. Fabián Omar Salvioli (parcialmente disidente)**

1. He acompañado en general la decisión del Comité en el caso *Aouabdia c. Argelia*, (comunicación N° 1780/2008); sin embargo, a la luz de los argumentos desplegados en la decisión, me veo en la obligación de dejar sentadas algunas consideraciones en lo relativo a la violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en asuntos de desaparición forzada de personas, profundizando el voto parcialmente disidente que hubiere emitido en el caso *Benaziza c. Argelia* (comunicación N° 1588/2007); también me referiré en esta oportunidad a ciertos aspectos relativos a las reparaciones cuando se aplica una norma que el Comité considere incompatible con el Pacto.

#### **I. Las desapariciones forzadas y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

2. Entiendo que el Comité debió concluir que el Estado es responsable de haber violado en perjuicio del Sr. Brahim Aouabdia, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin necesidad de hacer referencia —en este aspecto— al artículo 2.

3. La Observación general N° 6 del Comité, dice que los Estados partes deben tomar medidas concretas y eficaces para evitar la desaparición de individuos y deben establecer servicios y procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de personas desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a la vida<sup>24</sup>. Estas medidas concretas no pueden consistir solamente en otorgar recursos eficaces frente a las detenciones arbitrarias, sino igualmente en evitar cualquier acción de sus agentes que puedan provocar la desaparición forzada, en función del deber de *garantizar* el derecho a la vida.

4. En el caso presente el Comité ha dado por probados un conjunto de hechos alegados por la autora y no refutados ni desmentidos por el Estado; el Sr. Brahim Aouabdia fue detenido en su lugar de trabajo por agentes de policía uniformados, lo llevaron en su propio coche que apareció estacionado frente a la estación de policía e incluso usado por agentes pertenecientes a la policía. Más adelante le han transmitido oficialmente y por escrito que Brahim Aouabdia había sido trasladado a dependencias policiales y entregado posteriormente al Centro Territorial de Investigación (CTRI) de la Quinta Región Militar de Constantina el 13 de julio de 1994.

5. Por dichos aspectos y otros, donde quedó demostrado que el Estado fue responsable de la detención de la víctima, en un caso como el presente la carga de la prueba sobre los hechos respecto a la garantía del derecho a la vida recae en el Estado: 17 años después Brahim Aouabdia permanece desaparecido y resulta lógico indicar, desde la perspectiva del derecho internacional contemporáneo en materia de protección de los derechos humanos, que los hechos expuestos revelan la existencia de una violación del párrafo 1 del artículo 6, por cuanto el Estado parte incumplió su obligación de garantizar la vida del Sr. Brahim Aouabdia.

6. Ya he manifestado en mi voto separado en el caso Benaziza que el *deber de garantía* de los derechos establecidos en el Pacto se encuentra contemplado en tres dimensiones: por la primera de ellas, el artículo 2.1 recoge el deber de garantizar los derechos sin discriminación alguna, consagrando —como es obvio— el principio de no discriminación en el goce de los derechos; la segunda dimensión del deber de garantía está

<sup>24</sup> Observación general N° 6, párr. 4. (1982).

dada por la previsión del artículo 2.3, referida al recurso efectivo que le cabe a toda persona frente a cualquier violación de un derecho establecido en el Pacto. La tercera dimensión, se refiere a un deber de garantía de cada derecho en sí mismo.

7. Debo insistir en que no hace falta que cada derecho en el Pacto comience con el enunciado de que el Estado debe garantizarlo; sería absurdo señalar que el deber de garantía de los derechos solamente comprende la obligación de no discriminar, o la obligación de proporcionar un recurso frente a la violación del mismo; tampoco el deber de garantía *en sí mismo* se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, que se refiere a la toma de medidas legislativas o de otro carácter para *hacer efectivos* los derechos del Pacto. Dicha norma recepta los principios de efecto útil, y de autoejecutividad (*self executing*) de los derechos humanos, lo cual se relaciona intrínsecamente con el deber general de garantía, pero no agota al mismo.

8. Es de toda lógica comprender que hay un deber de garantía respecto de cada derecho establecido en el Pacto y en relación a cada persona sometida a la jurisdicción de un Estado. Ese deber de garantía en sí mismo se encuadra jurídicamente dentro de la previsión específica de cada derecho contemplado en el Pacto.

9. En consecuencia, en el caso presente se violó el artículo 6.1 porque el Estado no garantizó el derecho a la vida del Sr. Brahim Aouabdia; ello de ninguna manera implica la afirmación de que la víctima ha fallecido, ya que tal cuestión no está probada en el expediente. El Estado debe restituir el derecho, y en consecuencia tomar todas las medidas necesarias para que la víctima recupere, con vida, su libertad, tal como correctamente resuelve el Comité en el párrafo 9 de su decisión. Mientras tanto, debe permitir a los familiares las acciones civiles pertinentes, incluso en lo relativo a aspectos sucesorios y patrimoniales derivados de la desaparición forzada, y no del presunto fallecimiento.

## II. Las reparaciones cuando se aplica una norma incompatible con el Pacto

10. Desde mi incorporación al Comité he manifestado como una preocupación la necesidad de determinar reparaciones de manera más específica para que ayudar a los Estados a cumplir mejor las obligaciones asumidas conforme al Pacto.

11. En el presente caso (*Aouabdia c. Argelia*) el Comité correctamente ha señalado que el Estado parte no debería invocar las disposiciones de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional contra personas que invoquen las disposiciones del Pacto o que hayan presentado, o presenten, comunicaciones al Comité; entiendo que además el Comité debió señalar que algunas disposiciones de dicha Carta resultan manifiestamente incompatibles con el Pacto, lo cual representa una violación del artículo 2 del mismo leído conjuntamente con otras disposiciones, y en consecuencia haber determinado claramente en la reparación fijada la necesidad de que el Estado modifique la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, de acuerdo a la obligación de adoptar las normas y otras disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos establecidos en el Pacto, así como también para evitar la repetición de hechos como los que han motivado la comunicación bajo examen. Una decisión de dicho carácter se encuentra indudablemente bajo la competencia del Comité, y se dirige tanto hacia la mejor protección de las personas como a dar el debido efecto a las disposiciones del Pacto.

(Firmado) Sr. Fabián Omar Salvioli

[Hecho en español, francés e inglés, siendo el español la versión original. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]